

No. 36985

**Spain
and
Cuba**

Agreement between the Kingdom of Spain and the Republic of Cuba on the execution of criminal sentences. Madrid, 23 July 1998

Entry into force: *provisionally on 23 July 1998 by signature and definitively on 16 June 2000, in accordance with article 20*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 18 October 2000*

**Espagne
et
Cuba**

Accord entre le Royaume d'Espagne et la République de Cuba relatif à l'exécution des sentences pénales. Madrid, 23 juillet 1998

Entrée en vigueur : *provisoirement le 23 juillet 1998 par signature et définitivement le 16 juin 2000, conformément à l'article 20*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 18 octobre 2000*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
CUBA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES**

El Reino de España y la República de Cuba, denominados en adelante "las Partes", conscientes de los estrechos vínculos existentes entre ambos pueblos y animados por el deseo de facilitar la rehabilitación de los condenados permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales, han acordado lo siguiente:

Artículo 1.- Las Partes se comprometen, en las condiciones previstas en el presente Convenio, a concederse la cooperación más amplia posible en materia de ejecución de sentencias de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad.

Artículo 2 .- Para los fines del presente Convenio se considera:

- a) Estado de condena: aquél donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada;
- b) Estado de cumplimiento: aquél al cual el condenado o sancionado debe ser trasladado;
- c) Condenado o sancionado: el nacional que, en el territorio de la otra Parte, ha sido declarado, en virtud de una sentencia firme y ejecutoria, responsable de un delito y se le ha impuesto la pena o medida de seguridad correspondiente. Para el Reino de España se entiende como nacional quien

tenga tal cualidad de acuerdo con el Código Civil y para la República de Cuba quien ostentando tal cualidad con arreglo a su ley, resida permanentemente en su territorio.

Artículo 3.- 1. Las penas o medidas de seguridad privativas de libertad impuestas en el territorio de la República de Cuba a nacionales de España podrán ser extinguidas en establecimientos penitenciarios españoles o bajo la vigilancia de sus autoridades.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en el territorio de España a nacionales de la República de Cuba podrán ser extinguidas en establecimientos penitenciarios cubanos o bajo la vigilancia de sus autoridades.

3. El traslado podrá ser solicitado por el Estado de cumplimiento o el Estado de condena, a instancia del condenado o sancionado.

Artículo 4.- 1. Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito.

2. Cada Parte designará a una autoridad que se encargará de ejercer las funciones de tramitación previstas en el presente Convenio, estableciéndose la comunicación por vía diplomática.

3. El Estado de condena deberá informar a la brevedad posible al Estado de cumplimiento de la decisión de aceptación o denegación de la solicitud de traslado.

4. Con relación al traslado de un condenado o sancionado, la autoridad de cada una de las Partes tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y la posibilidad de que el traslado contribuya a la rehabilitación social del mismo, incluyendo la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales del condenado o sancionado, si los tuviere, las condiciones de su salud, la edad y los vínculos que por residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la vida social del Estado de cumplimiento.

Artículo 5.- El presente Convenio solo se aplicará con arreglo a las condiciones siguientes:

1. Que los actos u omisiones que han dado lugar a la sentencia penal, sean también punibles o sancionables en el Estado de cumplimiento, aunque no existiera identidad en tipificación.

2. Que el delito no sea político o de índole estrictamente militar.

3. Que el condenado o sancionado sea nacional del Estado de cumplimiento.

4. Que la sentencia sea firme, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.

5. Que el condenado dé su consentimiento para su traslado o, en su caso, el representante legal del mismo, en caso de incapacidad de aquél.

6. Que la duración de la pena que esté por cumplir, en el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el inciso c) del párrafo 2 del artículo 10.

sea por lo menos de 6 meses. En casos excepcionales las Partes podrán acordar la admisión de una solicitud, cuando el término por cumplir sea menor al señalado.

Artículo 6.- Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Convenio a cualquier condenado o sancionado que pueda quedar comprendido dentro de lo dispuesto en el mismo.

Artículo 7.- El condenado o sancionado puede presentar una solicitud de traslado directamente al Estado de cumplimiento o al de condena a través de su representación diplomática o consular, de un representante legal o de sus familiares.

Artículo 8.- El traslado del condenado o sancionado dependerá del acuerdo entre el Estado de condena y el de cumplimiento.

Artículo 9.- 1. El Estado de condena cuidará de que el consentimiento a que se refiere el punto 5 del artículo 5 sea otorgado voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas que se deriven.

2. La manifestación del consentimiento se regirá por la ley del Estado de condena.

3. El Estado de cumplimiento podrá verificar por medio de sus representantes acreditados ante el Estado de condena, que el consentimiento haya sido prestado en las condiciones previstas en el punto anterior.

Artículo 10.- 1. El Estado de cumplimiento acompañará a su solicitud de traslado la documentación siguiente:

- a) Un documento probatorio de la nacionalidad del condenado o sancionado de dicho Estado;
- b) una copia de las disposiciones legales de la que resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena en el Estado de condena, constituyen también una infracción penal o son susceptibles de una medida de seguridad en el Estado de cumplimiento.
- c) la concurrencia de los factores a que se refiere el párrafo 4 del artículo 4.
- d) Indicación aproximada de como se cumplirá la condena en el Estado de cumplimiento y la fecha de extinción de la pena o medida.

2. El Estado de condena incluirá en la documentación de traslado lo siguiente:

- a) El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado o sancionado;
- b) la relación de los hechos que hayan dado lugar a la sentencia;
- c) la naturaleza y duración de la pena, la fecha de inicio y terminación de

la condena, el tiempo ya cumplido y el que se le ha abonado por motivos tales como: trabajo, buena conducta o prisión preventiva, entre otros:

- d) una copia certificada de la sentencia haciendo constar su firmeza;
- e) el texto de la ley penal en base a la cual fue juzgado el condenado o sancionado;
- f) en su caso, el lugar del territorio del Estado de cumplimiento al que el condenado o sancionado desearía ser trasladado;
- g) cualquier información adicional que pueda ser útil a las autoridades del Estado de cumplimiento para determinar el tratamiento del condenado o sancionado con vistas a su rehabilitación social.

3. El Estado de cumplimiento y el Estado de condena antes de formular una solicitud de traslado o antes de adoptar la decisión de aceptarla o denegarla, podrán solicitar de la otra Parte los documentos o informaciones a que se refiere los párrafos 1 y 2 del este artículo.

Artículo 11.- Cada una de las Partes tomarán las medidas legislativas necesarias y en su caso, establecerán los procedimientos adecuados para que surtan efectos legales en su territorio las sentencias a que se refiere este Convenio dictadas por los Tribunales de la otra Parte.

Artículo 12.- 1. El cumplimiento de la condena en el Estado de cumplimiento se ajustará a las leyes de ese Estado.

2. En la ejecución de la condena, el Estado de cumplimiento:

- a) Estará vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la pena:
- b) estará vinculado por los hechos probados en la sentencia;
- c) no podrá convertir la pena en una sanción pecuniaria;
- d) deducirá íntegramente el tiempo realmente cumplido, el periodo de prisión provisional y, en su caso el reducido por beneficios penales y penitenciarios si existiesen;
- e) no agravará la situación del condenado o sancionado ni estará obligado por la sanción mínima que, en su caso, estuviere prevista por su legislación para la infracción cometida.

Artículo 13.- Cada Parte podrá conceder el indulto, la amnistía y la conmutación de la pena conforme a su Constitución u otras disposiciones legales aplicables, pero la revisión de la sentencia sólo corresponderá al Estado de condena.

En cualquiera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, la Parte que dictó el indulto, la amnistía, la conmutación de la pena o la revisión lo comunicará a la otra Parte.

Artículo 14.- El Estado de cumplimiento no podrá impugnar, modificar o dejar sin efecto la sentencia dictada por los Tribunales del Estado de condena. El Estado de de cumplimiento al recibir aviso del Estado de condena, de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan conforme a dicho aviso.

Artículo 15.- El condenado o sancionado entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Convenio no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado de cumplimiento por los mismos hechos delictivos por los cuales está sujeto a la sentencia correspondiente.

Artículo 16.- 1. Antes de efectuar la entrega solicitada y acordada, si el condenado o sancionado fuere solvente, debe haber satisfecho la responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en la sentencia condenatoria.

2. Si el condenado o sancionado fuere insolvente, el Estado de condena lo declarará como tal y el Estado de cumplimiento no contraerá obligación alguna en cuanto a la ejecución de la responsabilidad civil.

3. La entrega del condenado o sancionado por las autoridades del Estado de condena a la del Estado de cumplimiento, se efectuará en el lugar que convengan las Partes.

4. El Estado de cumplimiento se hará cargo de los gastos de traslado desde el momento en que el condenado o sancionado quede bajo su custodia.

Artículo 17.- Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado de cumplimiento de tal manera que prolongue la duración de la pena o medida de seguridad privativa de libertad más allá del término impuesto por la sentencia del Estado de condena.

Artículo 18.- El Estado de cumplimiento informará al Estado de condena:

- a) Cuando considere cumplida la sentencia;
- b) en caso de evasión o muerte del condenado o sancionado; y
- c) de aquello que, en relación con este Convenio, le solicite el Estado de condena.

Artículo 19.- El presente Convenio será también aplicable a personas sujetas a libertad condicional o limitación de libertad y a otras medidas previstas en las leyes de las Partes relacionadas con menores infractores. Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tipo de tratamiento que se aplicará a tales personas una vez trasladadas. Para el traslado, se obtendrá el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

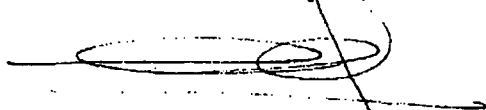
Artículo 20.- 1. El presente Convenio entrará en vigor provisionalmente al día siguiente de su firma y definitivamente 30 días después que los Estados Partes hayan intercambiado notificaciones, por la vía diplomática, indicando que han sido cumplidos sus respectivos requisitos legales internos para su entrada en vigor.

2. Cualquiera de las Partes puede denunciar el presente Convenio mediante notificación escrita, por vía diplomática en cualquier momento. La vigencia del Convenio cesará 180 días después de recibida tal notificación.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio.

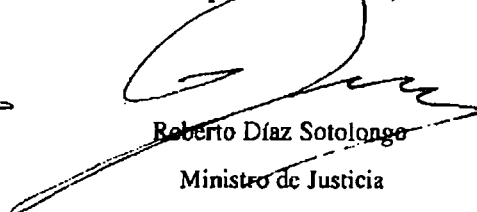
HECHO en la ciudad de Madrid el veintitrés de julio del año 1998, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino de España,



Margarita Mariscal de Gante y Mirón
Ministra de Justicia

Por la República de Cuba,



Roberto Díaz Sotolongo
Ministro de Justicia

[TRANSLATION - TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC
OF CUBA ON THE EXECUTION OF CRIMINAL SENTENCES

The Kingdom of Spain and the Republic of Cuba (hereinafter referred to as "the Parties"), conscious of the close ties existing between their two peoples and desiring to promote the rehabilitation of convicted persons by enabling them to serve their sentences in the country of which they are nationals, have agreed as follows:

Article 1

The Parties undertake, on the conditions set forth in this Agreement, to extend to each other the broadest possible cooperation in the execution of criminal sentences of persons sentenced to penalties or security measures involving deprivation of liberty.

Article 2

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Sentencing State" shall mean the State in which the person who may be transferred is sentenced;
- (b) "Enforcing State" shall mean the State to which the convicted or sentenced person is to be transferred;
- (c) "Convicted or sentenced person" shall mean a national who has been found guilty of an offence in the territory of the other Party by a final and enforceable judgement and on whom a penalty or a security measure has been imposed in consequence. For the Kingdom of Spain, a "national" is any person having that status in accordance with the Civil Code, and for the Republic of Cuba a national is any person having that status in accordance with its laws who resides permanently in its territory.

Article 3

1. Penalties or security measures involving deprivation of liberty imposed in the territory of the Republic of Cuba on nationals of Spain may be served in Spanish penal institutions or under the supervision of its authorities.
2. Penalties or security measures imposed in the territory of Spain on nationals of the Republic of Cuba may be served in Cuban penal institutions or under the supervision of its authorities.
3. The transfer may be requested by the enforcing State or the sentencing State at the request of the convicted or sentenced person.

Article 4

1. Requests for transfer and replies thereto shall be made in writing.
2. Each Party shall designate an authority to perform the procedural functions provided for in this Agreement, establishing communication through the diplomatic channel.
3. The sentencing State shall inform the enforcing State as promptly as possible of its decision to grant or reject the request for transfer.
4. With regard to the transfer of a convicted or sentenced person, the authority of each of the Parties shall bear in mind all relevant factors and the likelihood that the transfer will contribute to the person's social rehabilitation, including the nature and seriousness of the offence, the criminal record, if any, of the convicted or sentenced person, his or her state of health, age and social ties to the enforcing State resulting from residence, presence in its territory, family connections or other factors.

Article 5

This Agreement shall apply only on condition that:

1. The acts or omissions which resulted in the criminal sentence are also punishable in the enforcing State, even though they may be characterized differently;
2. The offence is not of a political or strictly military nature;
3. The convicted or sentenced person is a national of the enforcing State;
4. The sentence is final, without prejudice to the provisions of article 14;
5. The convicted person consents to the transfer, or, if the person is incapable of doing so, his or her legal representative gives consent;
6. At least six months of the penalty remain to be served at the time the request referred to in article 10, paragraph 2 (c), is submitted. In exceptional cases, the Parties may agree to accept a request when the period remaining to be served is less than that indicated above.

Article 6

Each Party shall explain the substance of this Agreement to any convicted or sentenced person who may be covered by its provisions.

Article 7

The convicted or sentenced person may submit a request for transfer directly to the enforcing State or to the sentencing State through his or her diplomatic or consular representative, legal representative or family members.

Article 8

Transfer of the convicted or sentenced person shall depend on agreement between the sentencing State and the enforcing State.

Article 9

1. The sentencing State shall ensure that the consent referred to in item 5 under article 5 has been given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.
2. Expression of consent shall be governed by the laws of the sentencing State.
3. The enforcing State may verify through its accredited representatives to the sentencing State that consent has been given under the conditions stipulated above.

Article 10

1. The enforcing State shall attach to its request for transfer the following documentation:
 - (a) Documentary proof that the convicted or sentenced person is a national of that State;
 - (b) A copy of the legal provisions showing that the acts or omissions that resulted in the conviction in the sentencing State also constitute a criminal offence or are subject to a security measure in the enforcing State;
 - (c) An indication of the existence of the factors referred to in article 4, paragraph 4;
 - (d) A general indication of how the sentence will be served in the enforcing State and the date on which the penalty or measure will be completed.
2. The sentencing State shall include the following in the transfer documentation:
 - (a) The name, date and place of birth of the convicted or sentenced person;
 - (b) A statement of the facts that resulted in the sentence;
 - (c) The nature and duration of the penalty, the starting and ending dates of the sentence, the time already served and the time credited for reasons such as work performed, good behaviour or pre-trial detention, among others;
 - (d) A certified copy of the judgement indicating that it is final;
 - (e) The text of the penal legislation on the basis of which the convicted or sentenced person was tried;
 - (f) If applicable, the place in the territory of the enforcing State to which the convicted or sentenced person wishes to be transferred; and
 - (g) Any additional information that might be useful to the authorities of the enforcing State in determining how the convicted or sentenced person should be treated with a view to his or her social rehabilitation.
3. Before submitting a request for transfer or before deciding whether to grant or deny such a request, the enforcing State or the sentencing State may request from the other Party the documents and information referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.

Article 11

Each of the Parties shall adopt the necessary legislative measures and, where required, establish appropriate procedures to give legal effect within its territory to sentences within the scope of this Agreement that are pronounced by the courts of the other Party.

Article 12

1. The sentence shall be served in the enforcing State according to the laws of that State.
2. In the execution of the sentence, the enforcing State:
 - (a) Shall be bound by the legal nature and duration of the penalty;
 - (b) Shall be bound by the facts established in the judgement;
 - (c) May not convert the sentence to a financial penalty;
 - (d) Shall deduct in full the time actually served, the period of pre-trial detention and, as appropriate, the time allowed for any penal or penitentiary credits;
 - (e) Shall not aggravate the situation of the convicted or sentenced person nor be bound by the minimum penalty that its legislation may require for the offence committed.

Article 13

Either Party may grant a pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other applicable legal provisions; however, a review of the sentence shall be the exclusive prerogative of the sentencing State.

In any of the circumstances referred to in the preceding paragraph, the Party granting the pardon, amnesty or commutation of sentence or revising the sentence shall so inform the other Party.

Article 14

The enforcing State may not challenge, modify or set aside the sentence pronounced by the courts of the sentencing State. The enforcing State, on being notified by the sentencing State of any decision affecting a sentence, must take appropriate action in accordance with such notification.

Article 15

A convicted or sentenced person delivered for execution of a sentence under this Agreement may not be detained, tried or sentenced in the enforcing State for the same criminal acts for which the existing sentence has been imposed.

Article 16

1. Before the requested and agreed transfer is effected, the convicted or sentenced person, if solvent, must first have satisfied his or her civil liabilities under the terms of the sentence.

2. If the convicted or sentenced person is insolvent, the sentencing State shall so declare him or her, and the enforcing State shall not undertake any obligation with regard to the enforcement of civil liability.

3. Delivery of the convicted or sentenced person by the authorities of the sentencing State to those of the enforcing State shall occur at a place agreed upon by the Parties.

4. The enforcing State shall assume the costs of the transfer from the time the convicted or sentenced person is taken into its custody.

Article 17

No sentence shall be executed by the enforcing State in such a way as to prolong the duration of the penalty or security measure involving deprivation of liberty beyond the term imposed by the sentence of the sentencing State.

Article 18

The enforcing State shall inform the sentencing State:

- (a) When it considers that the sentence has been fully served;
- (b) In the event of the escape or death of the convicted or sentenced person;
- (c) Of any information requested by the sentencing State in connection with the Agreement.

Article 19

This Agreement shall also be applicable to persons subject to parole, probation or other measures provided under the laws of the Parties relating to juvenile offenders. The Parties shall, in accordance with their laws, agree on the type of treatment to be accorded to such individuals upon transfer. Consent to the transfer shall be obtained from a person legally authorized to give it.

Article 20

1. This Agreement shall enter into force provisionally the day after signature and definitively 30 days after the States Parties have notified one another through the diplomatic channel that their respective domestic legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

2. Either Party may denounce this Agreement by giving written notice at any time through the diplomatic channel. The Agreement shall cease to have effect 180 days from receipt of such notice.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Madrid on 23 July 1998 in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
Minister of Justice

For the Republic of Cuba:

ROBERTO DÍAZ SOTOLONGO
Minister of Justice

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE CUBA RELATIF À L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉNALES

Le Royaume d'Espagne et la République de Cuba, ci-après dénommés " les Parties ", conscients des liens étroits existant entre les deux peuples et animés du désir de faciliter la réinsertion des condamnés en leur permettant de purger leurs peines dans le pays dont ils possèdent la nationalité, sont convenus comme suit :

Article premier

Les Parties s'engagent, dans les conditions prévues au présent Accord, à se prêter la plus grande entraide possible en matière d'exécution des sentences pénales d'individus condamnés à des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté.

Article 2

Aux fins du présent article, on entend par :

- a) " État de transfèrement " : la Partie où a été condamné l'individu qui peut être transféré;
- b) " État d'accueil " : la Partie vers laquelle l'individu condamné ou sanctionné doit être transféré;
- c) " Individu condamné ou sanctionné " : le ressortissant de l'une des Parties qui, reconnu coupable d'un délit dans le territoire de l'autre Partie, y a été condamné, aux termes d'une sentence définitive et exécutoire, à la peine ou mesure de sûreté correspondante. Le terme " ressortissant " s'entend, en ce qui concerne le Royaume d'Espagne, de celui qui possède la nationalité espagnole en application du Code civil et, en ce qui concerne la République de Cuba, de celui qui, excipant de cette qualité en application de sa loi, réside de façon permanente dans son territoire.

Article 3

1. Les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté imposées dans le territoire de la République de Cuba à des ressortissants de l'Espagne peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires espagnols ou sous la surveillance des autorités de ce pays.
2. Les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté imposées dans le territoire de l'Espagne à des ressortissants de la République de Cuba peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires cubains ou sous la surveillance des autorités de ce pays.
3. Le transfèrement peut être demandé par l'Etat d'accueil ou par l'Etat de transfèrement à la requête de l'individu condamné ou sanctionné.

Article 4

1. Les demandes de transfèrement et les réponses sont formulées par écrit.
2. Chaque Partie désigne une autorité qui se charge d'exercer les fonctions prévues dans le présent Accord, en établissant la communication par la voie diplomatique.
3. L'État de transfèrement informe l'État d'accueil, dans les meilleurs délais, de la décision d'accepter ou de rejeter la demande de transfèrement.
4. Pour se prononcer sur le transfèrement d'un individu condamné ou sanctionné, l'autorité de chacune des Parties tient compte de tous les facteurs pertinents et de la probabilité que le transfèrement contribue à la réinsertion sociale de cet individu, notamment de la nature et de la gravité du délit, des antécédents pénaux de l'individu condamné ou sanctionné, le cas échéant, de son état de santé, de son âge et des liens qui peuvent la rattacher à la vie sociale de l'État d'accueil du fait de sa résidence, de sa présence dans le territoire, de ses rapports familiaux et autres motifs.

Article 5

L'application du présent Accord est assujettie aux conditions suivantes :

1. Les actes ou omissions que réprime la sentence pénale doivent également être passibles de peines ou de sanctions dans l'État d'accueil, même s'ils n'y sont pas qualifiés de la même manière.
2. Le délit ne doit pas être de nature politique ou de caractère strictement militaire.
3. L'individu condamné ou sanctionné doit être un ressortissant de l'État d'accueil.
4. La condamnation doit être définitive, sans préjudice des dispositions de l'article 14.
5. L'individu condamné ou, le cas échéant, son représentant légal, doit donner son consentement au transfèrement.
6. La durée de la peine qui reste à purger au moment de la présentation de la demande visée à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 10 doit être d'au moins six mois. Exceptionnellement, les Parties peuvent accepter de recevoir une demande si la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois.

Article 6

Chaque Partie doit expliquer le contenu du présent Accord à tout individu condamné ou sanctionné à qui ses dispositions peuvent s'appliquer.

Article 7

L'individu condamné ou sanctionné, agissant par l'intermédiaire d'un représentant légal ou d'un membre de sa famille, peut adresser une demande de transfèrement directement à l'État d'accueil par la voie de la représentation diplomatique ou consulaire dudit État.

Article 8

Le transfèrement de l'individu condamné ou sanctionné est assujéti au commun accord de l'État de transfèrement et de l'État d'accueil.

Article 9

1. L'État de transfèrement veille à ce que le consentement visé au paragraphe 5 de l'article 5 soit donné volontairement et en pleine connaissance de ses conséquences juridiques.

2. La manifestation du consentement est régie par les lois et règlements de l'État de transfèrement.

3. L'État d'accueil peut vérifier, par l'intermédiaire de ses représentants accrédités auprès de l'État de transfèrement, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Article 10

1. L'État d'accueil joint à la demande de transfèrement :

a) Une pièce établissant que l'individu condamné ou sanctionné est un de ses ressortissants;

b) Copie des dispositions légales établissant que les actes ou omissions condamnés par l'État de transfèrement constituent également une infraction pénale ou sont passibles d'une mesure de sûreté dans l'État d'accueil;

c) Une pièce établissant la convergence des facteurs visés au paragraphe 4 de l'article 4; et

d) L'indication approximative de la façon dont la peine sera purgée dans l'État d'accueil et de la date d'extinction de la peine ou de la mesure.

2. L'État de transfèrement joint au dossier de transfèrement :

a) Nom, date et lieu de naissance de l'individu condamné ou sanctionné;

b) Une relation des faits condamnés;

c) Des précisions quant à la nature et à la durée de la peine, aux dates à laquelle la peine débute et à laquelle elle prend fin, à la période déjà purgée et aux remises ou réductions de peine dues à l'intéressé pour des motifs tels que son travail, sa bonne conduite, la durée de sa détention préventive etc.;

d) Copie conforme de la sentence, attestant que le jugement est définitif;

e) Le texte de la loi pénale en application de laquelle l'individu a été condamné ou sanctionné;

f) Le cas échéant, le lieu auquel l'individu condamné ou sanctionné souhaite être transféré dans le territoire de l'État d'accueil; et

g) Tous renseignements complémentaires pouvant être utiles aux autorités de l'État d'accueil pour décider du traitement à accorder à l'individu condamné ou sanctionné en vue de sa réinsertion sociale.

3. L'État d'accueil et l'État de transfèrement peut, avant de faire une demande de transfèrement ou avant d'adopter la décision d'accepter ou de rejeter une telle demande, réclamer à l'autre Partie les pièces et renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 11

Chaque Partie prend les mesures législatives nécessaires et, le cas échéant, établit les procédures adéquates pour donner effet légal dans son territoire aux sentences visées dans le présent Accord et prononcées par les juridictions de chacune des Parties.

Article 12

1. L'extinction de la peine dans l'État d'accueil est régie par les lois dudit État.
2. S'agissant de l'exécution de la sentence, l'État d'accueil :
 - a) Est lié par la nature juridique et la durée de la peine;
 - b) Est lié par les faits constatés dans le jugement;
 - c) Ne peut transformer la peine en une sanction pécuniaire;
 - d) Déduit intégralement la période effectivement purgée, la durée de la détention préventive et, le cas échéant, les remises ou réductions de peine éventuellement prévues par le droit pénal ou les règlements pénitentiaires;
 - e) Ne peut aggraver la situation de l'individu condamné ou sanctionné et n'est pas tenue par la sanction minimale que sa législation prévoit éventuellement pour l'infraction commise.

Article 13

Chacune des Parties a le pouvoir de remettre, d'amnistier et de commuer la peine ou la mesure de sûreté en application de sa Constitution ou autres dispositions légales applicables, mais seul l'État de transfèrement a le pouvoir de réviser la sentence.

Dans tous les cas dont il est question au paragraphe précédent, la Partie qui remet, amnistie ou commue la peine ou prononce la révision en informe l'autre Partie.

Article 14

L'État d'accueil ne peut contester, modifier ou infirmer la sentence rendue par les juridictions de l'État de transfèrement. Lorsqu'il est avisé par l'État de transfèrement de toute décision modifiant une sentence, l'État d'accueil adopte les mesures qui conviennent.

Article 15

L'individu condamné ou sanctionné qui est transféré pour l'exécution d'une sentence en application du présent Accord ne peut être arrêté, jugé ou condamné dans l'État d'accueil pour les faits délictueux pour lesquels il a été condamné ou sanctionné dans l'État de transfèrement.

Article 16

1. Avant que la demande de transfèrement ne puisse être acceptée et exécutée, l'individu condamné ou sanctionné doit, s'il est solvable, s'être acquitté de sa responsabilité civile comme en dispose la sentence.

2. Si l'individu condamné ou sanctionné est insolvable, l'État de transfèrement doit le déclarer comme tel et l'État d'accueil n'est redevable d'aucune obligation quant à la responsabilité civile dudit individu.

3. La remise de l'individu condamné ou sanctionné par les autorités de l'État de transfèrement à celles de l'État d'accueil s'effectue dans le lieu dont conviennent les Parties.

4. L'État d'accueil prend en charge les frais de transfèrement à compter du moment où il a la garde de l'individu condamné ou sanctionné.

Article 17

Aucune peine d'emprisonnement ne peut être exécutée par l'État d'accueil de manière à prolonger la durée de la peine ou de la mesure de sûreté au-delà de la date fixée dans la sentence rendue par l'État de transfèrement.

Article 18

1. L'État d'accueil informe l'État de transfèrement :

- a) De la date à laquelle il considère la peine purgée;
- b) De l'évasion ou du décès, le cas échéant, de l'individu condamné ou sanctionné; et
- c) De tout fait ou renseignement, lié au présent Accord, que l'État de transfèrement lui demande.

Article 19

Le présent Accord est également applicable aux individus en liberté conditionnelle ou surveillée, ou assujettis à d'autres mesures prévues par les lois des Parties concernant les délinquants mineurs d'âge. Les Parties conviennent, conformément à leurs lois, du traitement à accorder à ces individus après le transfèrement. Le consentement au transfèrement doit être obtenu de la personne légalement habilitée à ce faire.

Article 20

1. Le présent Accord entre en vigueur provisoirement le lendemain de sa signature et définitivement 30 jours après que les États Parties ont échangé, par la voie diplomatique, les notifications attestant qu'ont été accomplies les formalités prescrites par le droit interne aux fins de son entrée en vigueur.

2. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une notification écrite transmise par la voie diplomatique. Le présent Accord cesse alors de déployer ses effets 180 jours après la réception de ladite notification.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, signent le présent Accord.

Fait à Madrid le 23 juillet 1998, en deux exemplaires originaux en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
La Ministre de la justice

Pour la République de Cuba :

ROBERTO DIAZ SOTOLONGO
Le Ministre de la justice

